



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2024

Vistos los autos: “Enod S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, de los que

Resulta:

I) A fs. 96/127 Enod S.A. promueve demanda contra la Provincia de Buenos Aires a fin de que se declare la inconstitucionalidad de las siguientes normas locales: artículo 39, inciso b, de la ley 11.490; artículo 2º, inciso b, de la ley 11.518; artículos 1º y 3º de la ley 13.850; así como de los artículos 12 y 14 de la ley 13.930; 20 y 23 de la ley 14.044; y 20 y 24 de la ley 14.200.

Asimismo, pide que la declaración de inconstitucionalidad planteada se haga extensiva a toda otra norma que reproduzca el régimen impositivo cuestionado, por considerar que infringe lo establecido en los artículos 9º a 12, 75, inc. 13, y 126 de la Constitución Nacional al establecer un tratamiento diferenciado en el pago del impuesto sobre los ingresos brutos “en razón del lugar de elaboración de los bienes” (fs. 96 vta., segundo párrafo).

Relata que la empresa se dedica a la industria textil y, en particular, que desarrolla actividades de hilandería y tejeduría en sus establecimientos ubicados en la localidad de Morón (Provincia de Buenos Aires) y en el Parque Industrial de la ciudad de La Rioja, de la provincia homónima.

Señala que por medio de las normas impugnadas la demandada estableció un régimen que impone un tratamiento dispar en materia de ingresos brutos y explica que, en su mérito, aquellos contribuyentes que elaboran sus bienes fuera de la Provincia de Buenos Aires, al comercializarlos, deben afrontar una carga tributaria mayor que aquellos que los producen localmente.

Refiere que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, inciso b, de la ley provincial 11.490 y 2º, inciso b, de la ley local 11.518, el 13 de julio de 2001 la Gerencia Regional Metropolitana Conurbano Norte de la

Dirección Provincial de Rentas dictó la resolución 285/2001 por la que declaró que la actora se encontraba exenta –a partir del 1° de julio de 1994- del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la actividad “hilado, tejido y acabado de textiles, plastificado de telas, tintorería industrial” por contar con un establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires. Señala que tal beneficio alcanzaba a los ingresos provenientes de las ventas de productos comercializados independientemente del lugar en donde fueron elaborados.

Manifiesta que, con posterioridad, a partir de los informes 77/2002 y 107/2004 –del 29 de abril de 2002 y 9 de septiembre de 2004, respectivamente–, la Dirección Técnica Tributaria de la Dirección Provincial de Rentas modificó el criterio según el cual la citada exención alcanzaba a la totalidad de los ingresos de los contribuyentes que tuviesen un establecimiento productivo en la provincia, para comenzar a interpretar que tal beneficio procedía únicamente respecto de los ingresos originados por la venta de productos fabricados “íntegramente” en su territorio (fs. 106 vta., primer párrafo).

Afirma que después, a través de la Disposición Normativa Serie “B” 17/2007 de la Dirección Provincial de Rentas, la demandada también estableció que la exención resultaba de aplicación a los ingresos provenientes de la venta de los productos fabricados “íntegramente” en establecimientos industriales ubicados en su territorio, con el límite de los atribuidos a la Provincia de Buenos Aires correspondientes a la actividad beneficiada, por aplicación del Convenio Multilateral.

Expresa que por medio de la ley local 13.850 –sancionada en el mes de julio de 2008– se mantuvo el régimen de exención establecido en las leyes 11.490 y 11.518, pero se implementaron ciertas modificaciones que, en cuanto concierne a la accionante, implicaron la obligación de tributar Ingresos

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Brutos a la tasa del 1% respecto de los bienes fabricados en esa jurisdicción y del 3% para los elaborados en la Provincia de La Rioja. Señala que la demandada reprodujo ese mismo esquema normativo en las leyes impositivas anuales 13.930, 14.044 y 14.200, correspondientes a los períodos 2009, 2010 y 2011.

Expone que por medio de la resolución determinativa y sumarial 86/2006, en el marco de expediente administrativo n° 2306-114869/2004, la demandada le requirió el pago de presuntas diferencias en la liquidación y el ingreso del tributo cuestionado, correspondientes a los períodos fiscales 2000 (septiembre a diciembre), 2001, 2002, 2003 (enero a diciembre) y 2004 (enero a abril), respecto de las sumas obtenidas por la venta de bienes total o parcialmente elaborados en su establecimiento ubicado en la Provincia de La Rioja.

Por último señala que, sin perjuicio de las reseñadas diferencias que se suscitaron desde su implementación, el régimen cuestionado establece –como denominador común– la condición de que el contribuyente produzca sus bienes en un establecimiento ubicado dentro de la jurisdicción provincial para obtener una exención –total o parcial– o bien para acceder a un tratamiento menos gravoso en el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y, en función de ello, concluye en que tal normativa infringe lo establecido en los artículos 9° a 12; 75, inciso 13, y 126 de la Constitución Nacional.

II) A fs. 130 esta Corte declaró que la causa corresponde a su competencia originaria de acuerdo con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal (fs. 129/129 vta.), y ordenó correr traslado de la demanda.

III) A fs. 156/164 vta. la Provincia de Buenos Aires contesta la demanda y solicita su rechazo.

Sostiene que no se configuran los requisitos establecidos en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para la procedencia formal de la acción intentada.

En ese sentido argumenta que, al reivindicar su potestad de aplicar alícuotas diferenciales, la administración demandada ya fijó los alcances de la relación jurídica que la vincula con la parte actora y, por esa razón, no media un estado de incertidumbre respecto del alcance o modalidad de tal relación jurídica.

Por otra parte, señala que la existencia de actos administrativos que resolvieron la cuestión planteada en autos impone al actor acudir a la vía impugnatoria por ser el carril específico para desplazar la presunción de legitimidad.

Manifiesta que la cuestión planteada en estas actuaciones por la parte actora fue oportunamente introducida en el expediente administrativo n° 2306-114869/2004 y que, en ese marco, se dictó la resolución 86/06 por la cual se determinaron las obligaciones fiscales del contribuyente.

Relata que tal decisión fue recurrida por la accionante, que esa circunstancia motivó la intervención del Tribunal Fiscal de Apelación, que dicho órgano admitió parcialmente la impugnación formulada y dispuso que la autoridad de aplicación debía practicar una nueva liquidación que se ajustara a ciertas pautas establecidas en su resolución.

Precisa que la agencia de recaudación cumplió con tal disposición y que, con posterioridad, el Tribunal Fiscal local aprobó la liquidación presentada en el citado expediente administrativo.

Expone que, a raíz de ello, la parte actora inició la causa caratulada “Enod S.A. c/ Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ pretensión anulatoria – otros perjuicios” ante el Juzgado

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, en la que solicitó que se declare la nulidad de la última resolución dictada por el Tribunal Fiscal.

Por tal motivo, sostiene que la accionante intenta reeditar a través de este proceso “los mismos argumentos” que planteó a lo largo del expediente administrativo, así como en la demanda promovida ante la justicia provincial y concluye que, en tanto el contribuyente cuenta con vías establecidas en el ordenamiento jurídico para plantear su desacuerdo con el criterio y las decisiones adoptadas por la administración, no se constatan los presupuestos de admisibilidad de la acción declarativa.

Por otra parte, sostiene que el hecho de haber consentido la aplicación del régimen de exención contemplado por la ley 11.490 en su artículo 39, inciso b, y por el artículo 2°, inciso b, de la ley 11.518 durante un prolongado período de tiempo, y haber recibido sus beneficios, hace improcedente la pretensión de inconstitucionalidad esgrimida respecto de las normas indicadas.

Por último, sostiene la validez de la pretensión fiscal refutada en la demanda y destaca, entre otras consideraciones, que el objetivo de la medida fiscal aquí impugnada debe entenderse como una política enmarcada en la potestad de promover la industria local y estimular su desarrollo, reservada para sí a través del artículo 125 de la Constitución Nacional, y que la provincia grava con alícuotas diferenciales la realización de actividades distintas dentro de su ámbito jurisdiccional.

IV) Que a fs. 390/393 del incidente sobre medida cautelar (CSJ 230/2011 (47-E)/1) el Tribunal ordenó que la parte actora tributara en concepto de Ingresos Brutos –por la actividad que realiza– la alícuota establecida en el

artículo 27 de la ley local 14.394, replicada en las posteriores leyes impositivas provinciales 14.553 y 14.653, sin considerar el lugar de procedencia de los bienes que comercializa en el ámbito provincial. Asimismo se dispuso, con carácter cautelar, que en el futuro la accionante debería tributar “la misma alícuota que se establezca para los ingresos provenientes de la actividad desarrollada en establecimientos ubicados en territorio bonaerense”.

V) A fs. 315/345 y 347/354 vta. se agregan respectivamente los alegatos presentados por la parte actora y demandada.

VI) A fs. 358/361 la señora Procuradora Fiscal dictamina que, en relación con el planteo de inconstitucionalidad de los artículos 1° y 3° de la ley 13.850; 12 y 14 de la ley 13.930; 20 y 23 de la ley 14.044; y 20 y 24 de la ley 14200, no se ha adjuntado requerimiento de pago ni se ha intentado demostrar por otros medios la existencia de actos concretos de la Dirección Provincial de Rentas, dirigidos a gravar las actividades por los períodos fiscales en que esos preceptos estuvieron en vigor, lo cual, en su opinión, determina que el agravio invocado resulta conjetural y que ello obsta a la admisibilidad de la acción intentada.

Por su parte, respecto del cuestionamiento de los artículos 39, inciso b, de la ley 11.490 y 2°, inciso b, de la ley 11.518, opina que corresponde determinar si ha quedado firme el pronunciamiento del Tribunal Fiscal provincial que decidió el recurso interpuesto en sede local contra la resolución 86/06 –dictada con fundamento en las normas citadas–, lo cual, según sostiene, remite al estudio de cuestiones de hecho, prueba, derecho común y procesal, ajenas a las incumbencias del Ministerio Público.

Considerando:

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

1°) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (artículo 117 de la Constitución Nacional) con el alcance que se desprende de los siguientes considerandos.

2°) Que en la presente causa se cuestiona el régimen impositivo, implementado por la demandada a través de las leyes 11.490 (artículo 39, inciso b), 11.518 (artículo 2°, inciso b), 13.850 (artículos 1° y 3°), 13.930 (artículos 12 y 14), 14.044 (artículos 20 y 23) y 14.200 (artículos 20 y 24), por medio del cual se estableció un sistema de alícuotas reducidas o diferenciales en el Impuesto a los Ingresos Brutos para ciertas actividades en tanto se hubieran desarrollado en establecimientos productivos radicados en la provincia, con el propósito de fomentar su progreso económico e industrial (conf. fs. 151 vta., penúltimo párrafo). El planteo de la actora se hizo extensivo a toda otra norma que reprodujera el referido esquema impositivo cuestionado (ver fs. 96/96 vta., punto 2, último párrafo), que se replicó por distintas leyes hasta el año 2018.

Con fundamento en el citado régimen, la Provincia de Buenos Aires determinó la deuda de la actora en concepto del referido impuesto por los períodos septiembre de 2000 a abril de 2004 (conf. resolución 86/06 expediente n° 2306-114869/2004) que, apelada ante el Tribunal Fiscal provincial, concluyó con una liquidación de deuda respecto de la cual la actora dedujo una pretensión anulatoria (expediente n° 17.441). A su vez, la demandada emitió los títulos 525.719, 525.734 y 525.754 que encabezaron el juicio ejecutivo caratulado “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ ENOD S.A. y otros s/ apremio provincial” (expte. n° A-75.831), que se encuentra a decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, este Tribunal resolvió –mediante pronunciamiento agregado a fs. 390/393 del incidente sobre medida cautelar– que la parte actora

tributara, por el concepto aquí discutido, la alícuota prevista en las normas involucradas sin considerar el lugar de procedencia de los productos comercializados, y que pagara en el futuro la misma alícuota que se estableciera para los ingresos provenientes de la actividad desarrollada en establecimientos ubicados en territorio bonaerense. Dicha decisión inhibió cualquier requerimiento de pago respecto de la aquí discutida pretensión fiscal provincial.

Asimismo, a lo largo de todo este proceso, la accionada negó expresamente el derecho de la actora a pagar el impuesto bajo la misma alícuota que los contribuyentes cuya actividad productiva se desarrollara en establecimientos ubicados en el territorio de la provincia y defendió la validez de las normas que establecen la tasa que ha puesto en cuestión la firma accionante (conf. fs. 160, punto V; 163 vta., apartado tercero; 350 vta., punto IV y 354 vta., punto 8, entre otros antecedentes). De esta manera, la demandada ha dado por sentado que la controversia con su contraparte era actual y no una mera posibilidad sujeta a una cierta condición futura.

En mérito a lo expuesto, corresponde concluir en que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues los antecedentes reseñados y la postura de las partes revelan que no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta, sino que se propone precaver los efectos de la aplicación del régimen impositivo implementado sucesivamente por la demandada a través de las leyes cuestionadas.

En consecuencia, en el supuesto de autos, se encuentra configurada una controversia actual y concreta susceptible de habilitar la actuación de esta Corte a fin de fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 311:421; 318:30 y 327:1034), con los alcances que se establecerán en el considerando 6°.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

3°) Que, en cuanto al fondo del asunto, la cuestión a resolver en el *sub lite* presenta sustancial analogía con la ya examinada y resuelta por el Tribunal en Fallos: 340:1480 y en las causas CSJ 114/2014 (50-H)/CS1 “Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia de s/ acción declarativa de certeza” y CSJ 38/2014 (50-D)/CS1 “Droguería del Sud S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, sentencias del 31 de octubre de 2017 y 6 de noviembre de 2018, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en cuanto fueren aplicables al caso de autos, en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias.

En efecto, a la luz de los preceptos constitucionales examinados y de los criterios fijados por esta Corte a su respecto, queda en evidencia en este caso que, al gravar la actividad de la actora (hilandería y tejeduría) con las alícuotas del 3% y 4% en razón del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente, la aplicación de los artículos 1° y 3° de la ley 13850; 12 y 14 de la ley 13.930; 20 y 23 de la ley 14.044; 20 y 24 de las leyes 14200 y 14.333; 21 y 27 de las leyes 14.394, 14.553, 14.653 y 14.808; y de los artículos 20 y 26 de la ley 14.880, obstaculiza el desenvolvimiento del comercio entre las provincias.

Ello es así por cuanto las disposiciones citadas establecen una discriminación a través de la cual se lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y se altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte de “aduana interior” vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez del régimen

objeto de impugnación (Fallos: 340:1480 y CSJ 38/2014 (50-D)/CS1 “Droguería del Sud S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, ya citados).

4º) Que respecto del cuestionamiento a la constitucionalidad de los artículos 39, inciso b, de la ley 11.490 y 2º, inciso b, de la ley 11.518 corresponde destacar que, de acuerdo con las constancias del expediente 17.441 (cuyas fotocopias certificadas fueron recibidas a fs. 233 de estas actuaciones), con anterioridad al inicio de esta causa, la parte actora promovió una acción ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires, en la cual solicitó la declaración de nulidad de la pretensión fiscal reclamada por la demandada en relación con los períodos comprendidos entre septiembre de 2000 y abril de 2004 en el marco del expediente administrativo n° 2306-114869/2004, con fundamento en lo establecido en el artículo 53 de la ley local 13.850 (v. fs. 38 vta. y 44 vta., expediente 17.441).

5º) Que las constancias de estas actuaciones a ese respecto y las iniciadas ante la justicia provincial demuestran que, además de la identidad subjetiva, ambos procesos constituyen –en lo que concierne al examen de la validez de la citada pretensión fiscal–, distintas manifestaciones de un único conflicto, con relación al cual la firma demandante inició el primer proceso ante la justicia provincial.

Frente a ello, por no existir razones que justifiquen fragmentar la contienda en cuanto se refiere a la pretensión de nulidad planteada ante el citado juzgado provincial y a la impugnación constitucional de los artículos 39, inciso b, de la ley 11.490 y 2º, inciso b, de la ley 11.518 deducido por la parte actora en esta causa, con el propósito de abarcar la totalidad de los aspectos relacionados con la disputa, en virtud del principio de la *perpetuatio*



Corte Suprema de Justicia de la Nación

jurisdictionis, corresponde establecer la continuidad de la competencia del juez en lo contencioso administrativo provincial, a fin de valorar de manera integral las cuestiones vinculadas con el conflicto y permitir la unidad de criterio que evitará el dictado de pronunciamientos contradictorios (conf. causas CSJ 459/2005 (41-O)/CS1 “Orbis Mertig San Luis S.A.I.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”; CSJ 237/2009 (45-L)/CS1 “L.V. 7 Radio Tucumán S.A. y otro c/ Tucumán, Provincia de (Estado Nacional citado como tercero) s/ incidente sobre medida cautelar”; CSJ 268/2011 (47-M)/CS1 “Medanito S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción declarativa” y CSJ 2/2014 (50-I)/CS1 “Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ acción declarativa de certeza”, pronunciamientos del 27 de abril de 2010, 8 de junio de 2010, 21 de febrero de 2013 y 27 de junio de 2017, respectivamente, entre otros).

6°) Que en virtud de lo establecido en el considerando precedente corresponde excluir de este proceso la pretensión de inconstitucionalidad planteada por la actora respecto de los artículos 39, inciso b, de la ley 11.490 y 2°, inciso b, de la ley 11.518, la que deberá continuar su trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires, en el que se radicó la causa n° 17.441. En consecuencia, a los fines de la instrumentación de lo aquí dispuesto deberán remitirse al citado tribunal copias certificadas de las presentes actuaciones (conf. causa CSJ 2/2014 (50-I)/CS1 “Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ acción declarativa de certeza”, ya citada).

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se decide: I. Hacer lugar parcialmente a la demanda seguida por Enod S.A. contra la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de los artículos 1° y 3°

de la ley 13.850; 12 y 14 de la ley 13.930; 20 y 23 de la ley 14.044; 20 y 24 de las leyes 14.200 y 14.333; 21 y 27 de las leyes 14.394, 14.553, 14.653 y 14.808; y de los artículos 20 y 26 de la ley 14.880, que reproducen el régimen en el cual se fijaron alícuotas diferenciales en relación con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los términos indicados en los considerandos de este pronunciamiento. Con costas a la vencida (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). II. Excluir de este proceso la pretensión de inconstitucionalidad planteada por la actora respecto de los artículos 39, inciso b, de la ley 11.490 y 2º, inciso b, de la ley 11.518, la que deberá continuar su trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires, en el que se radicó la causa n° 17.441, a cuyo fin se le remitirán copias certificadas de las presentes actuaciones. III. Notifíquese, comuníquese a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON
HORACIO ROSATTI

Resulta:

Que el infrascripto coincide con los resultandos I a V del voto que encabeza la presente sentencia.

VI) A fs. 358/361 la señora Procuradora Fiscal dictamina que, en relación con el planteo de inconstitucionalidad de los artículos 1° y 3° de la ley 13.850, 12 y 14 de la ley 13.930, 20 y 23 de la ley 14.044 y 20 y 24 de la ley 14200, no se ha adjuntado requerimiento de pago ni se ha intentado demostrar por otros medios la existencia de actos concretos de la Dirección Provincial de Rentas dirigidos a gravar las actividades por los períodos fiscales en que estos preceptos estuvieron en vigor, lo cual, en su opinión, determina que el agravio invocado resulta conjetural o hipotético en tanto no se probó comportamiento alguno configurativo del requisito de "acto en ciernes" que pueda válidamente originar una relación jurídica concreta con la accionada. En esas condiciones, sostiene que la pretensión deducida, tendiente a obtener una declaración general y directa de inconstitucionalidad del condicionamiento establecido para el goce de la exención dada por las normas mencionadas, no constituye "causa" o "caso contencioso" que permita la intervención del Poder Judicial de la Nación.

Respecto del cuestionamiento del artículo 39, inciso b, de la ley 11490 y del artículo 2°, inciso b, de la ley 11.518, opina que corresponde determinar si ha quedado firme el pronunciamiento del Tribunal Fiscal provincial que decidió el recurso interpuesto en sede local contra la resolución 86/06 -dictada con fundamento en las normas citadas—, lo cual remite al estudio de cuestiones de hecho, prueba, derecho común y procesal ajenas a las incumbencias del Ministerio Público.

Considerando:

1°) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (artículo 117 de la Constitución Nacional) con el alcance que se desprende de los siguientes considerandos.

2°) Que con relación al planteo de inconstitucionalidad del artículo 39, inciso b, de la ley 11.490 y del artículo 2°, inciso b, de la ley 11.518, corresponde destacar que de acuerdo con las constancias del expediente 17.441 (cuyas fotocopias certificadas fueron recibidas a fs. 233 de estas actuaciones), con anterioridad al inicio de esta causa, la parte actora promovió una acción ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires, en la cual solicitó la declaración de nulidad de la pretensión fiscal reclamada por la demandada en relación con los períodos comprendidos entre septiembre de 2000 y abril de 2004 en el marco del expediente administrativo 2306-114869/2004, con fundamento en lo establecido en el artículo 53 de la ley 13.850 (v. fs. 38 vta. y 44 vta., expediente 17.441).

3°) Que las constancias de esas actuaciones y las iniciadas ante la justicia provincial demuestran que, además de la identidad subjetiva, ambos procesos constituyen —en lo que concierne al examen de la validez de la citada pretensión fiscal—, distintas manifestaciones de un único conflicto, frente al cual la firma demandante inició el primer proceso ante la justicia provincial.

En esas condiciones, por no existir razones que justifiquen fragmentar la contienda en cuanto se refiere a la pretensión de nulidad planteada ante el citado juzgado provincial y a la impugnación constitucional del artículo 39, inciso b) de la ley 11.490 y del artículo 2°, inciso b), de la ley 11.518 deducido por la parte actora en esta causa, con el propósito de abarcar la totalidad de los aspectos relacionados con la disputa, en virtud del principio de



Corte Suprema de Justicia de la Nación

la *perpetuatio jurisdictionis*; corresponde establecer la continuidad de la competencia del juez en lo contencioso administrativo provincial, a fin de valorar de manera integral las cuestiones vinculadas con el conflicto y permitir la unidad de criterio que evitará el dictado de pronunciamientos contradictorios (conf. causas CSJ 459/2005 (41-O)/CS1 "Orbis Mertig San Luis S.A.I.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad"; CSJ 237/2009 (45-L)/CS1 "L.V. 7 Radio Tucumán S.A. c/ Tucumán, Provincia de y otro c/ Tucumán Provincia de (Estado Nacional citado como tercero) s/ incidente sobre medida cautelar"; CSJ 268/2011 (47-M)/CS1 "Medanito S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción declarativa" y FLP 26096/2015/CS1 "Delta Dock y otro c/ Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires s/ acción mere declarativa de derecho", pronunciamientos del 27 de abril de 2010, 8 de junio de 2010, 21 de febrero de 2013 y 4 de noviembre de 2021, respectivamente).

4º) Que en virtud de lo establecido en el considerando precedente, corresponde excluir de este proceso la pretensión de inconstitucionalidad planteada por la actora respecto del artículo 39, inciso b) de la ley 11.490 y del artículo 2º, inciso b) de la ley 11.518, la que deberá continuar su trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires, en el que se encuentra radicada la causa n° 17.441. En consecuencia, a los fines de la instrumentación de lo aquí dispuesto, deberán remitirse al citado tribunal copias certificadas de las presentes actuaciones (conf. causa CSJ 2/2014 (50-I)/CS1 "Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 27 de junio de 2017).

5º) Que respecto del cuestionamiento a la constitucionalidad de los artículos 1º y 3º de la ley 13.850, 12 y 14 de la ley 13.930, 20 y 23 de la ley 14044 y 20 y 24 de la ley 14.200, el Tribunal comparte las consideraciones

efectuadas por la señora Procuradora Fiscal en el acápite V de su dictamen, a cuyos términos se remite.

Por ello, de conformidad, en lo pertinente, con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se decide: I. Disponer la remisión de copias certificadas de las presentes actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los fines indicados en el considerando 4°. II. Rechazar la demanda en cuanto persigue la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1° y 3° de la ley 13.850, 12 y 14 de la ley 13.930, 20 y 23 de la ley 14.044 y 20 y 24 de la ley 14.200. Con costas a la vencida (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). III. Notifíquese, comuníquese a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.



CSJ 230/2011 (47-E)/CS1

ORIGINARIO

Enod S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de
s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Parte actora: **Enod S.A.**, representada por los **doctores Mariano R. Guaita (ex letrado apoderado), Guillermo Gastón Dayraut e Ignacio María de la Riva (letrados apoderados)**, y **Juan Carlos Cassagne (letrado patrocinante)**.

Parte demandada: **Provincia de Buenos Aires**, representada por los **doctores María Florencia Quiñoa (letrada apoderada) y Alejandro Fernández Llanos (letrado patrocinante)**.